

<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/04/12/hoy/opinion/2561659.asp>



Panamá, martes **12 de abril** de 2011



Panamá Metro
T. max 31
T. min 23

Fuente: ETESA



iANÚNCIATE CON NOSOTROS!

contáctenos al 222-1222 o escríbanos a ventas@prensa.com

[prensa.com](#)

[La Prensa](#)

[Mi Diario](#)

[Variedades](#)

[Suplementos](#)

[Servicios](#)

[Clasificados](#)

[Cine](#)

[Turismo](#)

[Archivo](#)

[Suscriptores](#)

OPINION

Compartir

EL MALCONTENTO

¿Quién puede negar tanta evidencia?

PACO GÓMEZ NADAL

paco@prensa.com

Los manzanillos del poder dirán que todo forma parte de un complot extranjero, del imperialismo o de la envidia de algunos que no están participando del festín panameño. Y es posible. Pero es extraño que casi todas las fuentes coincidan en la degradación de la situación social y política en el país.

Desde dentro, la Asamblea Ciudadana, conglomerado de organizaciones de derechos humanos, sindicales, gremiales, profesionales, de base y personas preocupadas por las libertades en Panamá, lleva tiempo gritando a los cuatro vientos que las cosas no van bien, que hay un deterioro evidente de la institucionalidad democrática, una preocupante acumulación de poder y una absoluta impunidad. No solo esta plataforma denuncia. Lo hacen sindicatos independientes, organizaciones anti corrupción, gremios y, aunque aún con tímida voz, algunos empresarios.

Pero el coro de aduladores ocupa foros virtuales y programas de radio financiados por el Gobierno para negar la máxima y repetir el "vamos bien". En estos últimos días, sin embargo, allende las fronteras se ha hablado bastante de Panamá. Y no bien.

El estudio Cultura Política de la Democracia en Panamá, 2010, elaborado por el Barómetro de las Américas y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, señalaba que la percepción sobre la corrupción ha empeorado durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Hemos pasado del 70.2 % de panameños que creía que sus servidores públicos son corruptos al final del mandato de Martín Torrijos (una cifra ya lamentable) al 76.2 % durante esta administración. Cuando esta inmensa mayoría de un país ve así a sus funcionarios es difícil que la institucionalidad democrática avance. Orlando Pérez, profesor de la Universidad Central de Michigan y encargado de consolidar el informe, explicaba que si el Gobierno mantiene aún altos índices de popularidad es por la buena marcha de la macroeconomía, pero advertía de que, "en la medida en que la forma de gobernar del Presidente busque controlar a la oposición y los poderes del Estado, entonces sí habrá riesgos para el país".

Al mismo tiempo que se conocía este estudio, la secretaria de Estado de Estados Unidos, nada sospechosa de ser aliada estratégica de Suntracs, presentaba su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el planeta. Documento siempre intencionado que influye bastante en las decisiones bilaterales del Congreso de ese país. En ese informe Panamá sale mal parada. Si uno compara el informe sobre 2010 con los de los años anteriores hay un elemento que llama la atención. En los años 2007, 2008 o 2009 se señalaban algunos problemas persistentes, pero antes de listarlos se incluía una frase: "The government generally respected the human rights of its citizens" ("El Gobierno respeta en general los derechos humanos de sus ciudadanos").

En el informe de 2010 esa frase desaparece y se cambia por este listado tétrico: "Los problemas de derechos humanos incluyen el uso excesivo de la fuerza por la policía durante protestas, que se investigó; duras condiciones carcelarias; detenciones prolongadas antes del juicio; la corrupción, ineeficacia, y presunta manipulación política del sistema judicial; la presión política sobre los medios de comunicación; la corrupción en el Ejecutivo y en el poder Legislativo, así como en las fuerzas de seguridad; la discriminación y la violencia contra la mujer; la trata de personas; la discriminación sustancial contra personas con discapacidad; la continua marginación de las comunidades indígenas en las decisiones que les afectan; discriminación social y laboral generalizada contra los indígenas; discriminación social por razones de orientación sexual e identidad de género; la discriminación contra las personas con VIH/sida, y la violación de algunos derechos de los trabajadores".

Sea más o menos confiable la independencia de este informe, hay que prender las señales de alarma, a las que se suman las serias advertencias hechas por Human Rights Foundation, Reporteros Sin Fronteras (que bajó a Panamá del puesto 55 al 81 en respeto a la libertad de expresión) o la Sociedad Interamericana de Prensa (tampoco sospechosa de control comunista).

Ante estas evidencias hay dos actitudes. Tratar de tapar el sol con un dedo, que es lo que hacen afanosamente nuestros funcionarios y políticos oficialistas, o asumir que la "democratización de esta democracia" es tarea de todos. Si se opta por la segunda, el Gobierno debe sentarse con todos los actores de la vida nacional y comprometerse con gestos evidentes a respetar la separación de poderes, la fiscalización de la función pública y la aplicación estricta de todos los mecanismos necesarios para mejorar en el respeto de los derechos humanos. Si no se toma esta ruta el riesgo para el país es demasiado grande (aunque este no sea el que preocupe, de momento, a las calificadoras de riesgo de los mercados).



View this page in: [English](#)[Translate](#)[Turn off for: Spanish](#)[Learn more](#)

Advertencia: Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Editorial por la democracia S.A. Razón por la cual, el material publicado no se puede reproducir, copiar o transmitir sin previa autorización por escrito de Corporación La Prensa S.A.
Le agradecemos su cooperación y sugerencias a internet@prensa.com y Servicio al Cliente.
En caso de necesitar mayor información acceda a nuestra biblioteca digital o llámenos al 222-1222.

**ellas Financiero****tueskina.com**